

## Este primero de mayo

Las organizaciones laborales, al abocarse a las celebraciones del primero de mayo, han coincidido en expresar su profunda preocupación ante la fortísima ola de violencia que azota al país. La situación del país era violenta el 1 de mayo de 1988. Entre el 1 de enero y el 30 de abril de ese año se registraron un total de 73 violaciones de derechos humanos de los miembros de base de organizaciones laborales, de esas, hubo 44 casos de capturas, 22 asesinatos, 4 atentados y desapariciones. En 1989 el problema se ha agudizado. En los primeros cuatro meses de este año se han registrado 180 casos de acciones represivas contra dirigentes y miembros de base de organismos laborales o gremiales populares. Según cifras conservadoras, elaboradas a partir de las denuncias recogidas en la prensa escrita nacional, ha habido 7 asesinatos, 158 capturas, 8 atentados y al menos un caso de desaparición.

La preocupación fundamental de los trabajadores y de las organizaciones que los representan ha sido esta realidad violenta, a la cual se han sumado las expectativas político ideológicas de las elecciones presidenciales de marzo. En efecto, los comunicados y los saludos publicados en campos pagados por estas organizaciones laborales con ocasión de las celebraciones del día internacional del trabajo han girado en torno a la presentación de sus demandas económicas, sociales y políticas. Estas demandas han sido y siguen siendo permanentes, pero este año se han presentado con mayor premura. Otra novedad de los comunicados

de este primero de mayo ha sido la insistencia en que cese la represión. Recién comenzada la guerra, Mons. Romero clamó desde su púlpito, "en nombre de Dios, cese la represión." Nueve años después, aquella orden, preñada de angustia y de dolor, trágicamente sigue teniendo hoy más vigencia que entonces. Sin embargo, los hechos y las actitudes de los últimos meses muestran que quienes nos gobiernan aún no han entendido la imperiosa necesidad que los sectores populares tienen de desarrollar una gestión propia para asegurarse la satisfacción de sus necesidades. Ahora, ello no exime de que el contenido y la dinámica del movimiento popular organizado de los salvadoreños en algunos momentos tienda a cobijarse bajo otros ropajes ideológicos, políticos y hasta partidistas. Empero, su actividad primaria es siempre la defensa de los intereses vitales de quienes representan. Todas las organizaciones laborales salvadoreñas coinciden en reivindicar los derechos elementales de los trabajadores; lo que suele distinguirlas es la línea de acción política, pues cada una adopta aquella que considera más acertada según sus propios intereses.

En este primero de mayo, tanto la Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadoreños (UNTS), una central opuesta al gobierno actual; como la Central de Trabajadores Democráticos (CTS) de línea crítica moderada, y la Unión Nacional Obrero Campesina (UNOC) han coincidido en señalar con preocupación la profundización de la crisis económica, social y política, así como los

nuevos niveles de represión.

La UNTS en su comunicado del 1 de mayo señala el fracaso del proyecto norteamericano malamente ejecutado por el Partido Demócrata Cristiano. La administración demócrata cristiana ha sido tan desastrosa que dicho partido perdió las elecciones presidenciales frente al partido de la extrema derecha; partido al cual supuestamente debía relevar. En su comunicado, la UNTS declara que "la democracia formal ha agotado totalmente sus márgenes y lo que algunos maliciosamente o ingenuamente llamaron 'proceso democrático' se ha convertido en una verdadera dictadura militar oligárquica, que no es capaz de tolerar ni en principio ni en la práctica, la libertad de organización y movilización sindical, gremial y popular." Asimismo, la UNTS piensa que ARENA "a pesar de haber prometido paz en la campaña electoral reciente, el gobierno de ARENA ha manifestado posteriormente, que en realidad no están dispuestos a buscar una solución política negociada a la guerra, en términos serios y realizables en el camino hacia la paz." Según estas afirmaciones, la UNTS no está convencida de las intenciones de ARENA de buscar una salida negociada a la guerra. Por eso presenta una "Propuesta de los trabajadores para solucionar la crisis nacional," en la cual se consideran tres puntos centrales: garantizar la subsistencia de los sectores populares, parar inmediatamente la represión y abrir espacio a la democracia real entendida en términos de aceptar el derecho de organización, movilización y expresión política de todos los sectores, especialmente los sectores populares, que son los más desfavorecidos.

La UNOC, por su parte, se muestra preocupada porque "...nunca antes en la última década, estuvo tan tensa, convulsiva y difícil la realidad económica, política y social de nuestro país, y que nunca como ahora, la clase trabajadora salvadoreña había enfrentado este clima de zozobra e incertidumbre que sólo recuerda los métodos y acciones represivas de gobiernos dictatoriales del pasado... A nadie escapa que con la llegada de ARENA al poder total, la situación de miseria de

los trabajadores se verá agravada, lo mismo que incrementará la violencia con sacrificio de los derechos humanos del pueblo trabajador..." Según esto, la UNOC estaría aceptando indirectamente que los gobiernos anteriores, incluido el de la democracia cristiana nos han conducido al punto en que estamos; aparte de que es, justamente, la ejecución ineficiente cuando no torpe del ya mal concebido proyecto norteamericano lo que nos ha llevado a enfrentarnos a un gobierno de ARENA, exactamente 10 años después de un golpe de Estado que quiso acabar con esa orientación ideológica política en el poder.

En otra línea, la CTS se limita a hacer sus peticiones fundamentales "al nuevo presidente electo: 1. Luchar a la par del pueblo para erradicar la marginalidad social; 2. Reformar y renovar la legislación laboral y social; 3. Mejorar la reforma agraria... respeto a los derechos y reivindicaciones de los campesinos; 4. Por la paz con justicia social, luchar contra el armamentismo y combatir toda forma de terrorismo sin importar de donde venga; 5. Hacer respetar los derechos humanos y la libertad de expresión y pensamiento; y 6. Mejorar planes y políticas de creación de empleo respetando la estabilidad en el trabajo a todos los que por gracia de Dios gozan de ese privilegio."

La UNTS convocó a la tradicional marcha de conmemoración del primero de mayo. Al igual que años anteriores, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), en su comunicado de ese día, hizo un ingenuo y ardoroso llamado para que "esta fecha [sea] propicia para reflexionar..., acerca de la importancia de cada segmento de la población dando la contribución de su trabajo para la buena marcha de la comunidad;" en consecuencia, para la ANEP "es censurable... que las celebraciones del día internacional del trabajo sean aprovechadas en algunas partes para formular reclamos y plataformas de las llamadas reivindicativas para respaldar, las cuales se llevan a cabo manifestaciones que se dicen 'pacíficas' pero que de repente degeneran en motines callejeros..." Asimismo, la ANEP avaló la intensa campaña de acusaciones e intimidación lanzada por la Fuerza

Armada contra la realización de la marcha del primero de mayo al calificar como "oportunas las manifestaciones hechas por jefes de la Fuerza Armada, en el sentido de que se respetará el derecho de los grupos organizados a manifestarse públicamente, como parte de las celebraciones de esta fecha, pero sin salirse de los límites del orden y del respeto a la ley..." Sorprende el descaro de la empresa privada al pedir a los trabajadores abstenerse de presentar sus reivindicaciones en su día. Parece que solamente ella y sus organizaciones pueden presentar sus exigencias y demandas. La empresa privada se arroga un derecho muy poco democrático y, en esas condiciones, un privilegio que niega a los trabajadores. El documento de la ANEP muestra también lo poco que ha avanzado la cúpula empresarial en su comprensión del proceso nacional.

En este sentido y dando continuidad al papel tradicional conferido a las fuerzas armadas salvadoreñas, el coronel Mauricio Ernesto Vargas, jefe de la Tercera Brigada de Infantería y de la Tercera Zona Militar, y ex jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Fuerza Armada, declaró en San Miguel, el 1 de mayo, durante una rueda de prensa, que la inteligencia militar había detectado una masiva movilización de campesinos "y milicianos infiltrados que viajarían ayer en la madrugada a San Salvador, procedentes de las zonas rurales de este departamento, Morazán y La Unión, para reforzar la marcha del día del trabajo que había sido convocada por organizaciones sindicales como la UNTS, FENASTRAS, MPTL, FUSS y otras," por lo que "enterada la Fuerza Armada de esa información, se tomaron las medidas preventivas y de seguridad, colocando retenes ocultos a lo largo de la Ruta Militar, y a eso de las 5 y 6 de la mañana comenzaron a circular camiones y buses que transportaban campesinos. Los retenes militares también comenzaron a salir de sus escondites e interceptando los vehículos bajaron a sus ocupantes, conductores y pasajeros. Todos los campesinos al ser interrogados y registrados por los efectivos, dijeron que habían sido reclutados por activistas del FMLN, PA-DECOSM y PTL (MPTL?), quienes les habían

pagado la suma de 50 colones para que participaran en las marchas callejeras de ayer mismo... Algunos quedaron detenidos en vías de investigación, pero la mayoría había sido prevenida de que en el futuro se abstengan de hacerle el juego a la subversión, e inmediatamente les dijeron que regresaran a los lugares de procedencia... Muchos vehículos fueron interceptados en la misma forma en Sesori, Chapeltique, Santa Rosa de Lima, Jocoro, Pasaquina, Usulután, Zacatecoluca, San Vicente, etc."

Desde 1981 esta ha sido la primera vez en que un jefe militar no sólo reconoce explícitamente que la Fuerza Armada detiene e intimida a quienes viajan del interior del país a la capital para participar en una marcha de oposición, sino que además describe la estrategia militar utilizada para tal fin. En años anteriores, los jefes militares o guardaban silencio o negaban su participación en estas actividades reiteradamente denunciadas por las organizaciones populares. Aparentemente esta conducta de la Fuerza Armada responde a que ya "se acabaron los paños tibios para los subversivos," según declaraciones del mismo coronel Vargas. Si esto es así significaría que la Fuerza Armada está extendiendo sus ataques a todas aquellas personas e instituciones contrarias a su proyecto.

A estas alturas del proceso, la celebración del primero de mayo tiene una importancia especial, pues es una ocasión para que los trabajadores, los desempleados, los marginados, y los más afectados por la injusticia y la guerra vuelvan a presentar sus demandas más urgentes. Por ello, pese al intenso operativo militar de la Fuerza Armada, la marcha organizada por la UNTS, sus filiales y otros organismos humanitarios y comunales simpatizantes, fue impresionante, dadas las condiciones en las cuales tuvo lugar. En una coyuntura como la actual podría esperarse o una marcha poco numerosa pero violenta, o una marcha escasa y apagada por la represión. Sin embargo, este primero de mayo marcharon cerca de 15 mil personas, portando pancartas y coreando consignas cuyo blanco central lo constituyó la represión, exacerbada en los últimos días. Durante

su recorrido los manifestantes protestaron contra la violencia represiva y la guerra y exigieron el establecimiento de la paz. La actitud general de los manifestante fue de protesta, pero no de agresión.

La tarde del mismo primero de mayo, los medios de comunicación denunciaron numerosos casos de detenciones y registros de vehículos (de transporte colectivo sobre todo) y personas por parte de retenes militares, los cuales impidieron a numerosos campesinos y cooperativistas, procedentes del interior del país, participar en la marcha. Así lo reconoció orgullosamente el coronel Vargas en rueda de prensa, dada en la noche de ese mismo día. La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador No Gubernamental denunció también la captura de dos miembros de FECMAFAM al finalizar la actividad.

De este modo, la "Marcha de los trabajadores por la paz" resultó ser efectivamente pacífica pese al sensible incremento de la represión que la precedió, a la imponente presencia militar que la rodeó y a la fortísima campaña publicitaria de la Fuerza Armada, en la cual ésta predijo que sería violenta. Según los voceros militares "la inteligencia militar [había] detectado un plan terrorista

que implementarán el primero de mayo las organizaciones de fachada del FMLN."

Los jefes castrenses parecen haber visto todo esto como un intenso y exitoso trabajo para contrarrestar los "planes de la guerrilla." El 27 de marzo, el jefe del estado mayor, coronel René E. Ponce advirtió a "los sindicalistas y organizaciones no gubernamentales no... prestarse a las maniobras desestabilizadoras de la guerrilla, que busca mantener una efervescencia social previa a la toma de poder de Cristiani... Los guerrilleros buscan mártires para presentarlos en el ámbito internacional como fruto de la violencia institucionalizada."

En este primero de mayo ha quedado demostrado una vez más que el movimiento laboral constituye una concentración de fuerza suficiente para empujar significativamente el proceso nacional hacia la pacificación. Más aún, el movimiento laboral puede convertirse en límite de la próxima gestión gubernamental al ser el grupo social más crítico para la eficacia de cualquier gobierno, y porque ha crecido lo suficiente, al menos para contener una política extremadamente lesiva y represiva para los sectores populares.

C. R. R.